

La consulta plantea si resulta posible la comunicación de datos contenidos en la Historia clínica de un determinado paciente a un Tribunal Eclesiástico.

El artículo 11.2 d) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, dispone que será posible la cesión de datos de carácter personal sin contar con el consentimiento del afectado cuando “la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas”.

Por su parte, en el ámbito de la regulación de las historias clínicas, el artículo 16.3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, dispone que “el acceso a la historia clínica con fines judiciales (...) se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 14/1986, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico-asistencial, de manera que como regla general quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. Se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico-asistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso”.

Por tanto la resolución a la presente consulta consiste en analizar el contenido que ha de darse a las expresiones “tribunales”, contenida en el artículo 11.2 d) de la Ley Orgánica 15/1999, y “autoridad judicial”, a la que se refiere el artículo 16.3 de la Ley 41/2002.

Para realizar un adecuado análisis de la cuestión planteada, debe indicarse que, con carácter general y dado el contenido del citado artículo 11.2 d), parece que en el mismo se está haciendo exclusivamente referencia a los

órganos integrantes del poder judicial. Ello no obstante, será necesario comprobar si existe en nuestro ordenamiento alguna disposición de la que se desprenda que los tribunales eclesiásticos tienen la misma consideración que los integrantes del Poder Judicial. Solo en ese caso será posible considerar a los tribunales eclesiásticos incorporados al precepto.

La norma que se refiere a la actuación desarrollada por los Tribunales eclesiásticos es el Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Iglesia Católica, en materia de asuntos jurídicos, que forma parte de nuestro ordenamiento en virtud de lo establecido en el artículo 16.3 de la Constitución.

El artículo 6.2 del Acuerdo establece que “los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los Tribunales eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las partes, dichas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil y se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal civil competente”.

De este precepto se desprende que, a diferencia de las Resoluciones emanantes de los órganos del Poder Judicial, las Resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos precisarán, para su efectividad, que las mismas sean declaradas ajustadas al derecho interno en virtud de resolución dictada por los órganos jurisdiccionales civiles, razón por la cual difícilmente podrá considerarse una plena equiparación de los Tribunales eclesiásticos con los Jueces y Tribunales integrantes del Poder Judicial.

Esta misma conclusión se alcanza a partir de lo establecido en la Disposición Transitoria segunda que prevé la existencia de plenos efectos civiles para las sentencias dictadas en las causas que estén pendientes ante los Tribunales eclesiásticos al entrar en vigor en España el Acuerdo, que se regirán por el hoy derogado Concordato de 1953.

En consecuencia, y a tenor de lo indicado, no podrá considerarse a los tribunales eclesiásticos como integrados en los órganos del Poder Judicial a los efectos previstos en el artículo 11.2 d) de la Ley Orgánica 15/1999, siendo preciso para que proceda la cesión la existencia de consentimiento del afectado o disposición legal que así lo permita, en virtud de lo dispuesto en los artículo 11 y 21.3 de la citada norma así como de su artículo 7.3 al tratarse de datos relacionados con la salud de las personas.



Esta misma conclusión ya fue alcanzada por esta Agencia en informe de 13 de diciembre de 2000, al resolver un supuesto similar al ahora planteado